



Petro- futuros

Las empresas
petroleras nacionales
del Sur Global
en un mundo en
descarbonización



Euzko Herriko Unibertsitatea
Universidad del País Vasco



Principal Investigator

Daniel Chavez

Equipo S-OIL

Iñaki Bárcena (Senior Research Fellow)
Miguel Virizuela (Associate Research Fellow)
Aritz Landeta (Project Assistant, EHU)
Ruggero Lala (Project Manager, TNI)

Editor

Daniel Chavez

Participantes

Donna Andrews
Daniel Chavez
Judith Clifton
José Sergio Gabrielli de Azevedo
Amir Lebdiou
Yacob Mulugetta
Ticiania de Oliveira Alvares
Serik Orazgaliyev
Tatiana Roa Avendaño
Sean Sweney
Mark Swilling
Mabel Thwaites Rey
Miguel Virizuela

Por consultas editoriales, escribir a:
soil@ehu.eus

Cita sugerida:

Chavez, D. (ed.) (2026) *Petro-futuros. Las empresas petroleras nacionales del Sur Global en un mundo en descarbonización*. S-OIL Project Report. Universidad del País Vasco (EHU), Donostia, y Transnational Institute (TNI), Amsterdam.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



ERC Advanced Grant | Grant Number: 101200217
2026-2031

Índice

5

El proyecto S-OIL: Introducción

Daniel Chavez

13

¿Cuál transición?

Donna Andrews, Judith Clifton,
Amir Lebdioui, Yacob Mulugetta,
Mark Swilling, Mabel Thwaites Rey

33

La transición de la transición

José Sergio Gabrielli de
Azevedo, Ticiane de Oliveira
Alvares, Serik Orazgaliyev,
Tatiana Roa Avendaño,
Sean Sweeney,
Miguel Virizuela





El proyecto S-OIL: Introducción

1

S-OIL es un ambicioso proyecto comparativo de cinco años que investiga el papel cambiante de las compañías petroleras nacionales (EPN) en países de ingresos bajos y medios de África, Asia y América Latina, en el marco de las múltiples presiones que esas sociedades enfrentan, derivadas de la descarbonización de la economía global.

Las empresas estatales o controladas por el Estado poseen la mayoría de las reservas mundiales de petróleo, representan una gran proporción de la producción actual de hidrocarburos y son la fuente de la mayor parte de los ingresos fiscales de muchas economías del Sur Global que más dependen de la exportación de crudo. Sus estrategias corporativas, decisiones de inversión y alineamientos políticos serán determinantes para el éxito o el fracaso de la transición energética.

A pesar de su centralidad, las EPN del Sur Global siguen sorprendentemente poco estudiadas. La mayor parte de la literatura disponible se ha concentrado en las grandes empresas petroleras de propiedad privada, en la experiencia de unos pocos países exportadores de petróleo de altos ingresos, como Noruega o los países del Golfo, o en estudios de casos nacionales aislados o enmarcados estrictamente en términos institucionales o financieros. Actualmente no existen antecedentes de investigación comparativa, desde una perspectiva transregional y con base etnográfica, sobre la economía política de la propiedad estatal en la industria petrolera. S-OIL fue concebido para llenar ese vacío.

1.1 ¿Por qué este proyecto, por qué ahora?

Lo que hace que esta investigación sea a la vez oportuna y, en algunos aspectos, tardía, es la convergencia de varias presiones estructurales.

El imperativo de la descarbonización se intensifica: en escenarios compatibles con la senda de 1,5 °C del Acuerdo de París, la industria petrolera podría estar produciendo varios millones de barriles diarios por encima de la demanda hacia finales de esta década, con una proporción considerable de las reservas existentes clasificada como activos varados o como crudo “inquemable”.¹

El Estado ha vuelto al primer plano de la

política energética, tras cuatro décadas en las que la privatización y la liberalización de los mercados fueron las recetas de política pública dominantes tanto en el Norte como en el Sur global. En este marco, las compañías nacionales de petróleo (EPN) han consolidado su posición como actores dominantes: las empresas de propiedad o control estatal superan hoy a las históricas *supermajors* estadounidenses y europeas en producción, reservas y volúmenes de exportación. La relevancia analítica y política de estas compañías ha crecido justo cuando la academia y los centros de formulación de políticas, más centrados en la transición, han seguido ignorándolas.

1.2 Preguntas de investigación y objetivos

El proyecto está organizado en torno a tres preguntas interrelacionadas. La primera, ¿cómo incide la descarbonización de la economía mundial en la reestructuración de los mercados energéticos globales y regionales, junto con la reconfiguración del Estado y de la sociedad civil, en los países extractores de petróleo? En segundo lugar, ¿qué explica los niveles tan dispares de éxito o de fracaso de las compañías petroleras estatales a la hora de adaptarse o reconvertirse en el contexto de la transición energética? Tercero, ¿cómo afecta el paso a una economía baja en carbono a la capacidad de los países productores del Sur Global para atender demandas sociales, económicas y políticas apremiantes?

Tres objetivos estructuran el proyecto: valorar la naturaleza cambiante, la relevancia y el desempeño de las compañías petroleras de propiedad o control estatal; evaluar la huella social y los diversos aportes al

desarrollo de las EPN; y examinar críticamente si estas empresas pueden transformarse o reinventarse para una transición energética justa, y de qué manera.

Un supuesto de partida sustenta el diseño de S-OIL: las estrategias y el desempeño de las EPN están condicionados por la situación actual o a corto plazo de cada país como importador o exportador neto de crudo. Donde las reservas declinan y los costes de extracción son altos, se generan espacios para la reconversión y la diversificación; donde las reservas son abundantes y los costes de producción son bajos, prevalecen los incentivos para exprimir hasta la última gota de petróleo. La calidad institucional; las presiones fiscales; los intereses corporativos locales y extranjeros; los sindicatos y las organizaciones ambientales; y la posición de cada país en los mercados energéticos globales complejizan notablemente este patrón básico.

1.3 Plan de trabajo y marco analítico

El plan de trabajo de S-OIL se estructura en cuatro paquetes de trabajo interrelacionados. El primero establece una línea de base transregional mediante un mapeo sistemático y una revisión estructurada de bases de datos, informes de inteligencia empresarial y la literatura académica, política y técnica. El segundo implica un análisis comparativo y fundamentado de entre 15 y 20 países productores de petróleo en África, Asia y América Latina. En cada país se realizarán entre 10 y 15 entrevistas semiestructuradas con altos directivos, funcionarios de gobierno, parlamentarios, investigadores y representantes del empresariado, de los sindicatos y la sociedad civil.

El tercer paquete desarrollará una investigación etnográfica en profundidad sobre seis o siete casos de propiedad pública transformadora, con dos o tres casos por región, a cargo de investigadores doctorales. El cuarto paquete se ejecutará a lo largo de todo el proyecto, sintetizando hallazgos, refinando el marco teórico y conceptual y diseminando los resultados de investigación del proyecto.

La arquitectura analítica se basa en una adaptación del marco FESPET, desarrollado originalmente por Judith Clifton y Daniel Díaz Fuentes en la Universidad de

Cantabria para el análisis comparado de la internacionalización de las empresas multinacionales de propiedad estatal.²

Cinco dimensiones estructuran la comparación: la financiera (F), que examina la significación de la renta generada, la contribución fiscal y la asignación de capital; la ambiental (E), que significa una mirada más allá del greenwashing corporativo e investigar la huella ambiental real de las operaciones y los intentos de diversificación hacia las energías renovables; la social (S), que capta el papel de las EPN en el empleo, la infraestructura y la provisión de bienes y servicios; la político-económica (PE), que alude a la posición de estas compañías dentro de los proyectos nacionales de desarrollo y del reordenamiento geopolítico más amplio de la energía a escala global; y la tecnológica (T), que considera las capacidades de las EPN para desarrollar, adquirir o absorber las tecnologías que la transición requerirá, tanto en los hidrocarburos como más allá de ellos.

A lo largo del proyecto de investigación, los tres criterios propuestos por Erik Olin Wright para evaluar las alternativas contrahegemónicas (*deseabilidad, viabilidad y alcanzabilidad*) se emplearán para valorar las vías transformadoras que emerjan del trabajo empírico.

1.4 Bases teóricas y epistemológicas

S-OIL se inscribe en una corriente de economía política marxista y dialoga directamente con debates sobre teoría del Estado, la dependencia, la transición justa y el papel del Estado en el diseño y la implementación de la política industrial. El proyecto recurre al realismo crítico y a la

economía política cultural como ontologías de base y, en el plano metodológico, operacionaliza el método del caso ampliado propuesto por Michael Burawoy. El propósito es superar el formato de estudio de caso que ha caracterizado buena parte de la investigación previa sobre las NOC,

situando la empresa concreta dentro de la formación social más amplia que la produce y rastreando las relaciones dialécticas entre las transformaciones corporativas y las mutaciones más generales de la economía política de la energía en los planos global, regional y nacional. El diseño rechaza, por un lado, el encuadre institucionalmente estrecho de la literatura existente sobre las EPN y, por otro, las simplificaciones del paradigma de la *maldición de los recursos*, que reduce una variedad de trayectorias a un simplista diagnóstico negativo.

El proyecto asume una posición epistemológica explícita. El objetivo es desarrollar una ciencia social críticamente comprometida, en la que la producción de conocimiento resulte significativa no solo para la

comunidad científica, sino también para los actores políticos, ambientales y sociales con interés directo en los resultados de la transición.

Este compromiso se refleja en la composición del Consejo Científico Asesor, que reúne a académicos y expertos con experiencia en investigación científica, diseño de políticas públicas, instituciones multilaterales y movimientos sociales; en las alianzas institucionales con centros de investigación de tres regiones del mundo; y en la difusión prevista a través de talleres, seminarios regionales, una gran conferencia internacional, una base de datos *online* de acceso abierto, infografías, vídeos documentales, una exposición fotográfica y la producción de uno o más libros.

1.5 El equipo de investigación, los arreglos institucionales y los socios internacionales

El proyecto se basa en el grupo de investigación Ekopol de la Universidad del País Vasco (EHU), la institución anfitriona. El Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, es la entidad cobeneficiaria y aporta apoyo institucional y logístico, en particular para el trabajo de campo y la difusión de los productos de investigación. Una vez plenamente constituido, el equipo de S-OIL estará integrado por el investigador principal, dos investigadores posdoctorales y tres investigadores predoctorales.

El trabajo de campo en las tres regiones del mundo se operacionalizará mediante acuerdos formales de colaboración con instituciones socias. En América Latina, el proyecto trabajará estrechamente con el Instituto de Estudios Estratégicos sobre

Petróleo, Gas y Biocombustibles (INEP, Brasil), la Fundación FUNDAR (Argentina) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); en África, con las universidades de Ciudad del Cabo y de Stellenbosch; y en Asia, con la Universidad Nazarbayev de Kazajistán y una red de investigadores del sudeste y del este de Asia.

Estos acuerdos procuran garantizar que la investigación comparativo siga anclada en los contextos institucionales, políticos y culturales específicos de cada país considerado por el proyecto, y que el conocimiento se coproduzca con investigadores y profesionales radicados en las regiones estudiadas, en lugar de importarse desde fuera.

1.6 El seminario inaugural y esta publicación

El proyecto S-OIL se puso en marcha en marzo de 2026 con un seminario inaugural celebrado en la sede de Bilbao de la Universidad del País Vasco. El seminario reunió a más de 100 participantes, incluyendo a miembros del Consejo Científico Asesor, otros académicos, estudiantes de maestría y doctorado, activistas sindicales, ex altos responsables de la toma de decisiones en países productores de petróleo, y otros investigadores de la universidad anfitriona y del TNI.

Dos paneles temáticos y un taller cerrado trazaron la senda analítica que el proyecto recorrerá durante los próximos cinco años y dieron lugar a los intercambios recogidos en esta publicación. Los dos capítulos que siguen presentan transcripciones editadas de los paneles con académicos, expertos de la industria petrolera y activistas sindicales de tres regiones del mundo, quienes abordan las preguntas analíticas que S-OIL se ha planteado.

Las discusiones presentadas en las páginas siguientes anticipan muchas de las tensiones que la investigación tendrá que enfrentar de manera rigurosa: entre soberanía energética y descarbonización; entre los imperativos del desarrollo y las restricciones climáticas; entre las presiones estructurales de los mercados globales de capital y las posibilidades de acción política que ofrece la propiedad pública de las EPN; y entre las dimensiones técnicas y culturales de cualquier transición que pueda considerarse, con verosimilitud, *justa*.

El primer panel (capítulo 2) se centra en quién asume la transición, qué está en juego y en qué términos; el segundo panel (capítulo 3) aborda el papel de las compañías nacionales de petróleo y discute si la trayectoria actual puede describirse de manera creíble como una *transición*.

¹ Pellegrini, L., Arsel, M., Muñoa, G., Rius-Taberner, G., Mena, C., y Orta-Martínez, M. (2024). The atlas of unburnable oil for supply-side climate policies. *Nature Communications*, 15, 2318. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46340-6>.

² Clifton, J., y Díaz-Fuentes, D. (2023). How do state owned enterprise multinationals behave abroad? A multi-dimensional framework for analysis. *Journal of Economic Policy Reform*, 26(1), 67–81. <https://doi.org/10.1080/17487870.2022.2079509>.



La extensa refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, región del Magdalena Medio, Colombia. Foto: Daniel Chavez.



Daniel Chavez: Las empresas estatales o controladas por el Estado poseen la mayoría de las reservas mundiales de petróleo, representan una gran proporción de la producción actual de hidrocarburos y son la fuente de la mayor parte de los ingresos fiscales de muchas economías del Sur Global que más dependen de la exportación de crudo. Sus estrategias corporativas, decisiones de inversión y alineamientos políticos serán determinantes para el éxito o el fracaso de la transición energética.



¿Cuál
transición?

2

El primer panel reunió a académicos de África, Europa y América Latina para debatir sobre la transición justa, la soberanía energética y el papel de las compañías petroleras nacionales del Sur Global en el marco de la descarbonización de la economía mundial.

La conversación fue moderada por **Donna Andrews** (Universidad de Ciudad del Cabo). Los panelistas fueron **Judith Clifton** (Universidad de Cantabria), **Amir Lebdioui** (Universidad de Oxford), **Yacob Mulugetta** (University College London), **Mark Swilling** (Universidad de Stellenbosch) y **Mabel Thwaites Rey** (Universidad de Buenos Aires).

Aitor Jiménez, profesor de Derecho en la Universidad del País Vasco, intervino desde el público.

La transcripción ha sido editada para mayor claridad y reorganizada temáticamente.

2.1 ¿Qué es una transición justa, y para quién?

Donna Andrews

En este panel intentaremos no repetir los mismos argumentos de siempre, sino fomentar el diálogo crítico y un debate en profundidad. La primera parte de nuestra conversación, sobre la transición justa y el desarrollo, se basa en la premisa de que necesitamos las voces y perspectivas de los países del Sur Global. Un aspecto fundamental de este proyecto es aclarar qué significa realmente una *transición justa*. ¿Qué implica para el desarrollo? ¿A quién nos referimos cuando usamos ese concepto? ¿Y con qué definición queremos trabajar?

Yacob Mulugetta

Es un verdadero placer estar aquí en España, un país que, se podría argumentar, conserva cierto grado de cordura política en comparación con lo que vemos en otras partes del mundo, particularmente en respuesta a la catástrofe en Palestina y, más recientemente, la situación en Irán.

“ Un aspecto fundamental de este proyecto es aclarar qué significa realmente una *transición justa*. ¿Qué implica para el desarrollo? ¿A quién nos referimos cuando usamos ese concepto?

Sobre la transición justa, un grupo de investigadores elaboró un informe, centrado principalmente en África, en el que intentamos plasmar nuestra comprensión del concepto.³ El problema es que la idea de la transición se suele enmarcar en torno a los intereses de los estados, y los gobiernos de los países exportadores de petróleo

suelen argumentar que los hidrocarburos son combustibles de transición, especialmente el gas, y plantean el debate dentro de una dicotomía Norte-Sur. Las personas rara vez ocupan un lugar central en esa discusión.

En ese informe, titulado *Visiones de la transición justa desde África*, identificamos tres dimensiones que a menudo se pasan por alto. La primera es la soberanía energética: el desafío no es sólo proporcionar energía para la industria o el transporte, sino también garantizar una distribución más justa de los recursos en toda la sociedad, con las personas en el centro del análisis. La segunda es la soberanía alimentaria. Los alimentos y la energía están profundamente interrelacionados y alrededor del 80 por ciento de la comida que se consume en África es importada. Estuve en Dakar hace dos semanas y me sorprendió mucho entrar en un supermercado llamado Ocean, utilizado por personas de todas las clases sociales, propiedad de una familia francesa, y ver que aproximadamente el 95 por ciento de sus productos eran importados. Se trata de una crisis de soberanía alimentaria directamente relacionada con la forma en que se organizan los sistemas energéticos.

La tercera dimensión se refiere a la producción. África es un continente rico en recursos, pero, en la revolución de las energías renovables, participa como proveedor de materias primas, una posición extremadamente extractivista.

Captar valor en los niveles más altos de la cadena de suministro requiere un pensamiento de política industrial a largo plazo. Sin él, la transición reproduce, en lugar de

transformar, la estructura existente. En resumen, una transición justa comienza por las personas.

Mark Swilling

Sudáfrica fue el primer país en incluir una transición justa en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en el marco del Acuerdo de París. Sin embargo, en mi país, el concepto se utiliza de al menos cuatro maneras distintas, cada una de las cuales refleja una constelación de poder diferente.

La primera postura, articulada principalmente por los bancos, consiste en transitar lo más rápidamente posible hacia una economía descarbonizada y basada en energías renovables para reactivar el crecimiento económico, con la suposición de que los beneficios se extenderán a toda la población. En la práctica, se trata de una transición injusta, aunque se autodenomine justa. La segunda postura es la misma idea básica, combinada con intervenciones de bienestar para mitigar los impactos negativos en los trabajadores del carbón y las comunidades mineras. El 85 % de la energía de Sudáfrica proviene del carbón. Esta postura asistencialista es ampliamente compartida por el gobierno y los donantes internacionales. La tercera postura es que una transición justa implica una reindustrialización de la economía, liderada por las energías renovables, y una política industrial centrada en la reasignación del capital hacia inversiones productivas para reconstruir Sudáfrica como una economía industrial. Es una propuesta radical en una economía altamente financiarizada, donde muy poco capital fluye hacia la inversión productiva: solo el 2 % del capital de los fondos de pensiones de Sudáfrica se destina a infraestructura. Tenemos el decimosexto mayor fondo de pensiones del mundo, superior al de España; sin

embargo, el 45 % de ese capital sale del país. Esta configuración de flujos financieros perjudica a los pobres y resulta profundamente destructiva para la clase trabajadora. El plan de inversión para una transición energética justa cambió el panorama, pasando de la segunda a la tercera posición, y el presidente Cyril Ramaphosa describió recientemente la economía verde como la mayor oportunidad económica del país. El marco de industrialización verde que sustenta esa idea desafía la estructura actual del poder financiero.

La cuarta posición, articulada principalmente por sindicatos, ONG radicales y movimientos sociales, sostiene que una transición justa solo es posible en un entorno poscapitalista. Aún es necesario construir la coalición de fuerzas necesaria para modificar el equilibrio de poder. Yo me sitúo firmemente entre la tercera y la cuarta posición. Es progresista destacar la importancia de una transición justa como política industrial, pero a largo plazo, necesitamos un cambio en las relaciones de poder si queremos pensar seriamente en una alternativa poscapitalista.

Judith Clifton

En primer lugar, quiero expresar mi gran satisfacción por formar parte de este proyecto y por el hecho de que Daniel Chavez, un académico comprometido, haya recibido la *Advanced Grant* del Consejo Europeo de Investigación (ERC). Sé lo intimidante que puede ser este proceso. El listón está extraordinariamente alto, y no debemos olvidar su importancia.

Cuando los científicos sociales nos preguntamos qué significa una transición justa, surgen muchas interrogantes: "¿Justa para quién?", "¿Cómo lo sabemos?", "¿Con qué fundamentos?". En el proyecto *GreenPaths*, un consorcio de Horizonte Europa integrado por 13 socios,



Thoko Dlamini (izquierda) y Lonhanhla Mthethwa, activistas de la Asamblea de Mujeres Rurales de África Austral (RWA). Mbeka, Shiselweni, Eswatini. Foto: Daniel Chavez.

“

Judith Clifton: En el discurso político europeo, la transición justa casi siempre se asocia con el lema “no dejar a nadie atrás”. ¿Qué significa esto en la práctica? En su interpretación más generosa, significa garantizar que las personas más vulnerables de la sociedad no se vean perjudicadas por las políticas que todos deberíamos impulsar. Pero entonces hay que determinar quiénes son vulnerables y cómo se compartirán los recursos.

entre ellos universidades, el Instituto Transnacional de Holanda, el Instituto de Ecología Política de Croacia, Amigos de la Tierra Europa y Oxfam Intermón, optamos deliberadamente por no conformarnos con una única definición.⁴ El plural en el nombre es intencional: no existe un único *camino verde*. Trabajar junto a ONG y organizaciones de la sociedad civil ha sido un verdadero reto y, creo, genuinamente productivo, de una manera que no se da en entornos puramente académicos.

En el discurso político europeo, la transición justa casi siempre se asocia con el lema “no dejar a nadie atrás”. ¿Qué significa esto en la práctica? En su interpretación más generosa, significa garantizar que las personas más vulnerables de la sociedad no se vean perjudicadas por las políticas que todos deberíamos impulsar. Pero entonces hay que determinar quiénes son vulnerables y cómo se compartirán los recursos.

Teóricamente, el concepto puede desglosarse en cuatro dimensiones: *justicia distributiva*, que se refiere a cómo se asignan los costes y los beneficios; *justicia de reconocimiento*, que se refiere a qué conocimientos e intereses se reconocen; *justicia procesal*, que se refiere a quién participa en las decisiones; y *justicia cosmopolita*, que se refiere a cómo las obligaciones se extienden más allá de las fronteras y las generaciones. Si creemos que estos objetivos se están alcanzando, y cómo podríamos saberlo, es precisamente lo que pretenden abordar nuestros estudios de caso.

Contamos con 15 estudios de caso que abarcan sectores completamente diferentes: minería de litio, minería de carbón, hidrógeno y financiación climática, entre otros. Al examinar lo que realmente ha sucedido en el marco del Pacto Verde Europeo, no hemos encontrado que la

transición haya sido particularmente justa. Eso no quiere decir que no se haya hecho nada bueno. Los políticos mantuvieron el Pacto Verde durante la pandemia sin titubear, al menos hasta hace poco, cuando se ha producido una disminución de la ambición, impulsada en parte por las exigencias de la política industrial. Pero se han hecho muchas cosas que no se pueden calificar fácilmente de *justas*. El caso del litio es un claro ejemplo de extractivismo. El fondo para una transición justa, diseñado para apoyar a los trabajadores y las comunidades de la minería de carbón, incluso en España, ha sido lento y, en muchos casos, el dinero simplemente no ha llegado a quienes lo necesitan.

Mabel Thwaites Rey

Una transición justa y deseable sería aquella que atendiera los intereses, necesidades y demandas de la humanidad en su conjunto y, sobre todo, las de los sectores populares. Justicia aquí significa justicia contra la apropiación privada de recursos energéticos con el único fin de obtener ganancias.

Nos encontramos en una coyuntura verdaderamente terrible. Existe un elemento adicional que complica cualquier perspectiva de una transición justa: el desarrollo de la inteligencia artificial, que está generando una demanda de energía intensa y descontrolada a nivel mundial, incluidas las energías renovables, si se permite que esta forma de desarrollo tecnológico crezca al ritmo previsto actualmente. Tendemos a pensar en la IA como algo inmaterial, como si existiera solo en la nube. Pero la realidad material de esta nueva forma de desarrollo tecnológico es que consume cantidades cada vez mayores de energía, lo que genera una demanda insaciable de recursos que alimenta guerras y la toma del control de países del Sur, como

vemos hoy en Venezuela. Lo que comenzó como un proyecto para una transición negociada y ordenada entre los países productores de petróleo y las industrias consumidoras de energía, en respuesta a las preguntas de los trabajadores sobre qué sucedería con sus empleos, se ha vuelto mucho más turbulento.

Los países exportadores de petróleo del Sur Global, muchos de los cuales dependen de la explotación de recursos por falta de otras alternativas a corto plazo, se enfrentan ahora a estas tensiones

contrapuestas simultáneamente.

Repensar el significado de la justicia hoy en día debe llevarnos a pensar no solo en la justicia planetaria, que es una demanda legítima, sino también en no destruir a los habitantes del planeta antes de que el planeta mismo sea destruido. Existe un impulso tan intenso por la apropiación violenta de los recursos energéticos que corremos el riesgo de perder nuestra humanidad antes de que el planeta sea devastado por el cambio climático.

2.2 ¿Una agenda impuesta desde el Norte? El dilema energético del Sur Global

Amir Lebdioui

Este proyecto plantea una pregunta crucial: desde un punto de vista puramente tecnológico, ¿son las energías renovables superiores al petróleo? ¿De dónde proviene realmente nuestra dependencia del petróleo? La civilización humana se sustenta en la energía; sin embargo, seguimos confundiéndola con los combustibles fósiles. La etnografía, un enfoque metodológico fundamental del proyecto S-OIL, constituye una vía verdaderamente productiva para abordar esta cuestión. Se relaciona con la reflexión sobre las compañías petroleras nacionales en muchos de los países que este proyecto analiza. Las EPN no solo custodian recursos energéticos, sino también algo más amplio. Algunos países, como México, tienen muy pocos años de producción restantes. Solo eso debería generar serias dudas sobre la conveniencia de mantener esa dependencia.

En términos de desarrollo, resulta evidente que la descarbonización global, tal como está estructurada actualmente, no solo

está ignorando a los países en desarrollo, sino que los está rezagando aún más, erosionando los ingresos fiscales, dificultando la creación de empleo y concentrando los beneficios de la transición energética en las regiones más ricas del mundo. El argumento de que las transiciones energéticas generan un aumento neto del empleo es correcto en términos generales, pero estos empleos no se materializan en los lugares donde se pierden los empleos existentes.

Los países en desarrollo enfrentan un riesgo concreto. Para que la transición sea justa, los países en desarrollo necesitan apropiarse genuinamente del proceso. Actualmente, en demasiados casos, tenemos un modelo liderado por donantes, donde agencias externas llegan para decirles a los países cómo deben llevar a cabo su descarbonización. No mencionaré casos específicos en detalle, pero el funcionamiento de la agencia alemana de cooperación para el desarrollo es ilustrativo: impone un plan sobre cómo otros países deberían descarbonizarse, diseñado para satisfacer los deseos de los donantes en

lugar de las necesidades de esos países. Comprender las diferentes perspectivas y encontrar puntos en común es fundamental.

“ Para que la transición sea justa, los países en desarrollo necesitan apropiarse genuinamente del proceso. Actualmente, en demasiados casos, tenemos un modelo liderado por donantes, donde agencias externas llegan para decirles a los países cómo deben llevar a cabo su descarbonización.

Esto se relaciona con un libro editado por Sabrina Fernández, para el cual escribí un capítulo.⁵ Lo que me impactó de ese libro es que reúne a autores completamente diferentes: sindicalistas, economistas, sociólogos, antropólogos, artistas, fotógrafos; incluso hay una exposición de arte integrada en el libro, y todo es de acceso abierto. Ese tipo de enfoque multivocal es precisamente lo que es atractivo en el diseño del proyecto S-OIL. Especialmente para los movimientos progresistas y ecologistas, donde vemos el desacuerdo más intenso. Encontrar puntos en común entre diversos puntos de vista no es un lujo; es metodológicamente esencial.

En mi trabajo sobre cómo los países exportadores de hidrocarburos podrían apropiarse de sus transiciones, he identificado tres canales principales. El primero es lo que llamo el *vínculo de recursos*. Argelia, por ejemplo, está consumiendo una proporción creciente de lo que produce internamente, lo que reduce lo disponible para la exportación. En Oriente Medio, la mayoría de las centrales de gas dependen de turbinas extremadamente ineficientes con enormes pérdidas de energía. La modernización con tecnología más eficiente

liberaría volúmenes significativos para la exportación, al tiempo que satisfaría las necesidades internas. En este contexto, una transición energética nacional no debería consistir en producir hidrógeno verde para los consumidores alemanes, sino en asegurar el futuro energético propio y, en consecuencia, liberar recursos para las exportaciones.

El segundo canal es el *vínculo fiscal*, que se relaciona directamente con la observación de Mark sobre la política industrial. Muchos países productores cuentan con capital; el problema es que ese dinero termina en fondos soberanos que invierten exclusivamente en el extranjero, en lugar de hacerlo a nivel nacional. La limitación de capital, la mayor barrera estructural para la industrialización verde, es, en parte, autoinfligida.

El tercer canal es el *vínculo con la capacidad productiva*, particularmente relevante para este proyecto. Las EPN no son meras recaudadoras de rentas. Han acumulado importantes capacidades de ingeniería en todo el proceso de extracción: ingeniería química, conocimiento de sistemas energéticos e infraestructura de oleoductos, todas ellas directamente transferibles a las cadenas de suministro de energía limpia. Hemos mapeado sistemáticamente esas capacidades transversales: la mayoría pueden reutilizarse. Lo que resulta realmente difícil de transferir es la ingeniería de perforación a gran profundidad. Todo lo demás ya existe. Estas empresas no necesitan empezar de cero. Pueden convertirse en los principales actores de la transición energética en lugar de ser las perdedoras.

Yacob Mulugetta

Conviene basar este debate en cifras concretas. En algunas zonas de África subsahariana, el 85 % de la población carece



Activistas indígenas de Colombia, Ecuador, Perú y Brazil exigen el fin de la explotación petrolera en la Amazonia, en la Primera Conferencia de Salida de los Combustibles Fósiles. Santa Marta, Colombia, abril de 2026.
Foto: Daniel Chavez.

“

Mabel Thwaites Rey: Repensar el significado de la justicia hoy en día debe llevarnos a pensar no solo en la justicia planetaria, que es una demanda legítima, sino también en no destruir a los habitantes del planeta antes de que el planeta mismo sea destruido.

de acceso a la electricidad. El consumo per cápita en la región ronda los 180 kilovatios-hora al año, apenas una fracción de lo que se consume en España o en cualquier otro país europeo. Esto no se debe a que la gente sea más eficiente energéticamente, sino simplemente a que no tiene acceso a la electricidad..

La terminología de la descarbonización es reveladora. Trabajé durante un tiempo en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, donde mi área de especialización era el desarrollo bajo en carbono. Recuerdo mi primera conversación sobre la descarbonización con un ministro de Etiopía, un país que acababa de formular una política de alto crecimiento y cero emisiones de gases de efecto invernadero. La argumentación de ese ministro fue muy aguda: “¿Por qué debería ser esa nuestra agenda? La descarbonización no es nuestra agenda. Es la de otros”. Este planteamiento refleja la postura de la mayoría de los gobiernos africanos. Además, hay buenas razones por las que muchos en el continente prefieren hablar de emisiones evitadas en lugar de descarbonización: las emisiones de África pertenecen al futuro, no al pasado ni al presente. El lenguaje de la descarbonización implica una responsabilidad que no corresponde a países que apenas se han industrializado.

Mientras tanto, las empresas públicas estatales del continente son, en muchos casos, disfuncionales, en parte porque la infraestructura colonial heredada se ha mantenido sin transformarse: los mismos sistemas, los mismos principios, los mismos enfoques, al servicio de una población predominantemente agraria y rural para la que esa infraestructura nunca fue diseñada. Existe una verdadera desconexión entre la política y la práctica. Lo sucedido tan solo en el último año es revelador: se añadieron 16 gigavatios de distribución

de energía descentralizada en África. La capacidad instalada total de África es de 75 gigavatios, la misma que la de Francia y Alemania juntas, para una población de más de mil millones de personas y economías que crecen a un ritmo del 3%, 6% o 9% anual. En un año, se pusieron en marcha 16 gigavatios, aproximadamente el 20% del total existente. Todo esto no se debe al éxito de las políticas, sino a su fracaso: la gente compra e instala sus propios sistemas porque las empresas de servicios públicos no pueden suministrarlos. La transición justa se está produciendo de forma fragmentada y totalmente descoordinada, al margen de cualquier marco político.

Esto nos indica que necesitamos una evaluación mucho más profunda de lo que entendemos por *transición justa y descarbonización*. Una agenda política ambiciosa, desconectada de los beneficios reales, no beneficia a la gente.

Mark Swilling

La electricidad total generada en el continente africano equivale a la producción combinada de Francia y Alemania. Esto representa 140 millones de personas en dos países europeos frente a más de mil millones en África. Si África continúa utilizando combustibles fósiles, no se cumplirá ninguno de los objetivos del Acuerdo de París.

Por lo tanto, cabría esperar que la comunidad internacional tuviera un gran interés en financiar un futuro con bajas emisiones de carbono. Coincido con Jacob: no deberíamos centrarnos en la descarbonización, sino en las vías de desarrollo del continente. Sin embargo, la financiación climática que ha llegado a África en las últimas dos décadas representa aproximadamente el 2% del total desembolsado a nivel mundial. La contradicción es evidente,

y en el contexto actual de conflicto geopolítico, las probabilidades de que África reciba la financiación que necesita de fuentes internacionales son muy bajas.

Esto plantea un debate productivo, aunque psicológicamente complejo, para los responsables políticos africanos: ¿cómo movilizar el capital ya existente en el continente? Los fondos soberanos y de pensiones están predominantemente controlados por inversores extranjeros. ¿Cómo se recircula el capital en África? El Banco Africano de Desarrollo ha comenzado a tomar esta cuestión en serio. También se relaciona con el diseño de estrategias nacionales. Bajo las presidencias brasileña y

sudafricana del G20, se instó a los países del Sur Global a formular sus propios planes de transición, elaborados por su propia gente, en lugar de aceptar marcos diseñados externamente. Brasil y Sudáfrica fueron los primeros en hacerlo. Trabajé para el gobierno colombiano en 2024 y 2025 para ayudar a desarrollar su estrategia nacional. La ministra de medio ambiente renunció antes de que mi informe fuera presentado, por lo que nadie lo ha leído. Pero el modelo colombiano ahora se está utilizando como referencia por varios países africanos, y los colombianos no lo saben.

2.3 El Estado, la propiedad pública y la cuestión energética.

Mabel Thwaites Rey

La frase “la gente primero” aparece por doquier en este tipo de debates. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Para la soberanía energética y la soberanía fiscal, para determinar quién soporta la carga de la transición y quién se beneficia, es fundamental abordar la cuestión del Estado. ¿Cuál es el margen de maniobra política actual y qué lecciones podemos extraer? Y, en un sentido más amplio: ¿cuál es el papel del Estado en relación con una transición justa y un desarrollo equitativo, no solo en lo que respecta a las compañías petroleras nacionales, sino también en relación con la transición hacia fuentes de energía renovables, especialmente considerando la importancia que el petróleo ha tenido en la vida cotidiana de las personas, en términos de empleo, identidad y supervivencia económica?

Lo que este proyecto intenta hacer, y lo que todos nosotros aquí intentamos hacer,

es unir el conocimiento académico y técnico con el tipo de conocimiento que puede servir a fines transformadores. No se trata simplemente de una declaración de principios, sino de construir bases sólidas desde las cuales librar la lucha política por la transformación que la gente necesita y desea. El debate teórico sobre el Estado como una contradicción plantea la pregunta: ¿desde dónde operamos? La gente habla a través de sus lugares de residencia y de trabajo. Pero eso tiene que cristalizarse en algún punto, especialmente en actividades tan técnicamente complejas como la energía, que requieren una cooperación altamente sofisticada entre campos de conocimiento específicos, y donde siempre hay intereses contrapuestos. En el sistema capitalista que bien conocemos, la primera pregunta siempre es quién gana dinero, qué se hace con él, cómo se distribuye y cómo se ejerce presión dentro de y entre los Estados nacionales formalmente soberanos. Además,

estamos en un momento de implosión del sistema estatal internacional.

La razón para mantener a las empresas estatales nacionales como objeto de estudio en un proyecto como este es que, en la medida en que existan empresas estatales, podemos pensar en hacer política desde la perspectiva pública. Una empresa pública debe ser, al menos formalmente, coherente con los intereses generales del Estado nacional, y ese compromiso formal es, en sí mismo, un terreno de lucha.

“ Una empresa pública debe ser, al menos formalmente, coherente con los intereses generales del Estado nacional, y ese compromiso formal es, en sí mismo, un terreno de lucha.

Mi país, Argentina, nunca fue un país exportador de petróleo como México, Colombia o Venezuela, pero tenía petróleo. En 1922, se creó la Compañía Nacional de Petróleo (YPF) con un propósito estratégico: establecer la soberanía energética y utilizar la empresa como regulador interno de precios, dado que los costos de la energía influyen en la producción, la industria y los hogares comunes.

El proceso dio forma a una empresa técnicamente sólida, con un fuerte sentido de pertenencia colectiva, que resistió un siglo de gobiernos de distintas tendencias políticas y los embates de las políticas neoliberales. En la década de 1990, fue privatizada y vendida a Repsol; paradójicamente, una empresa española que no era productora de petróleo y que, siguiendo la lógica capitalista, extrajo tantos recursos como pudo hasta 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió frenar el desangramiento de la empresa

con una renacionalización parcial. La paradoja de vender una empresa petrolera a una empresa sin petróleo nos dice algo sobre la lógica de la privatización.

Tras la renacionalización parcial, el gobierno comenzó a desarrollar la producción de energías renovables y a considerar la transición. Un nuevo elemento transformó la posición de Argentina: el descubrimiento de Vaca Muerta, un yacimiento no convencional que, por primera vez, abrió la posibilidad de que Argentina se convirtiera en exportador, junto con la controversia que generó el *fracking* y sus consecuencias ambientales, y con la necesidad imperiosa de no depender de la exportación de productos agrícolas, que históricamente habían sido la base productiva del país.

Luego llegó el gobierno de Javier Milei, que simplemente calificaré de un desastre y cuyas consecuencias aún sufrimos. Habíamos presenciado la esperanza que generó la elección de Petro en Colombia; luego experimentamos lo contrario. El gobierno de Milei se ha dedicado a desmantelar lo construido: retomando una lógica de privatización y revirtiendo proyectos de energías renovables que ya estaban muy avanzados, a pesar de los años de dificultades económicas que Argentina ha enfrentado debido a las políticas neoliberales y la monstruosa acumulación de deuda.

Uno de los aspectos que este proyecto de investigación debería abordar en profundidad es la relación entre la empresa pública, que requiere continuidad durante décadas, y los violentos cambios de gobierno que interrumpen proyectos, desmotivan al personal calificado y retrasan la posibilidad de reflexionar colectivamente sobre qué hacer.



Margarida Vasco, orgullosa agricultora, activista campesina y miembro de la Asociación Rural Graça Machel. Maputo, Mozambique. Foto: Daniel Chavez.

“

Yacob Mulugetta: el desafío no es sólo proporcionar energía para la industria o el transporte, sino también garantizar una distribución más justa de los recursos en toda la sociedad, con las personas en el centro del análisis. Los alimentos y la energía están profundamente interrelacionados, y alrededor del 80 por ciento de la comida que se consume en África es importada.

Vaca Muerta encapsula el dilema. ¿La dejamos sin explotar? ¿No extraemos este recurso no convencional? Pero también representa una oportunidad histórica para transformar la matriz productiva de Argentina. Estos dilemas requieren una reflexión política en profundidad. No se resuelven por sí solos. Se resuelven reconociendo

las innumerables contradicciones ambientales, sociales y políticas, involucrando los intereses concretos de sociedades concretas, y construyendo solidaridad entre ellas. Esa construcción colectiva y solidaria es, en sí misma, parte de lo que el debate de este proyecto deberá abordar.

2.4 Compañías petroleras nacionales: ¿guardianas, criminales o facilitadoras de la transición?

Aitor Jimenez

Amir Lebdioui se refirió a Petrobras y otras compañías petroleras nacionales como guardianas de los recursos. Pero estamos hablando de algunos de los peores criminales corporativos en términos de daño social y ambiental. Mabel Thwaites Reyes ya aclaró que los intereses estatales y corporativos no siempre coinciden con los del pueblo, como podemos ver ahora mismo en Venezuela, donde el Estado está en sintonía con el imperialismo. La propiedad nacional no ofrece ninguna garantía.

Y a Mark Swilling: hablas de inversión masiva en infraestructura, política industrial y empleos. Eso suena bastante a capitalismo viejo, y puede que me equivoque, pero no creo estar del todo equivocado.

Amir Lebdioui

No me atrevería a hablar específicamente de Petrobras habiendo auténticos expertos en esa empresa presentes en esta sala. Pero en muchos países en desarrollo, las EPN han sido guardianas de la soberanía, no solo energética, sino también económica y política en un sentido más amplio. En toda África, han sido actores políticos clave en materia de soberanía porque la alternativa no era un futuro abstracto y más

limpio. La alternativa era que otros se apropiaran de tu petróleo y recibieras muy poco a cambio. En muchos países, incluido el mío, Argelia, esas empresas negociaron mejores acuerdos, defendieron los intereses energéticos nacionales y generaron ingresos fiscales sustanciales cuyos efectos en el Estado fueron realmente significativos.

Yo vengo de una pequeña ciudad costera con una refinería de petróleo, algo que siempre me pareció terrible: tenerla en medio de una ciudad tan chica. Pero para la gente que vivía allí, era motivo de orgullo. Mi padre me contaba que los jóvenes solían pedir prestada la chaqueta de Sonatrach de un amigo para salir, porque trabajar para la empresa nacional simbolizaba en qué se había convertido el país.

En la naturaleza, la adaptación es la clave para la supervivencia, así que las cosas deben cambiar, y tendremos que replantearnos el papel de estas empresas. Pero el propósito inicial detrás de su creación y nacionalización a menudo provenía de una razón legítima. La cuestión es si ese propósito puede reorientarse para afrontar los desafíos actuales.

Mark Swilling

Consideremos una serie de países socialistas, capitalistas y de capitalismo de Estado. ¿En cuál de ellos, independientemente de la ideología, el Estado no quiso invertir en infraestructura industrial? En todos, sí lo hizo. Argumentar que la inversión en capacidad industrial e infraestructura es, por definición, capitalista es analíticamente incorrecto. Los estados socialistas construyeron ferrocarriles, redes eléctricas y plantas industriales. Lo mismo hicieron los estados coloniales y los estados desarrollistas.

El verdadero desafío político en Sudáfrica es, en primer lugar, lograr que esa inversión se concrete; y en segundo lugar, construir las coaliciones políticas que garanticen que el valor extraído no beneficie a las élites internacionales o locales. Esto depende de que el movimiento sindical

tome la decisión estratégica de separarse del partido gobernante, algo que aún no ha sucedido.

“ Argumentar que la inversión en capacidad industrial e infraestructura es, por definición, capitalista es analíticamente incorrecto.

Los sindicatos refuerzan la estructura actual de acumulación de capital, aunque se oponen a ella retóricamente. El Partido Comunista se separó recientemente del ANC y se presentará a las elecciones locales de forma independiente, pero su historia juega en su contra. Todavía no tenemos un equivalente a los partidos progresistas que, en sus mejores momentos, han cambiado el equilibrio de poder en América Latina.

2.5 La financiación climática. ¿Quién paga, quién se beneficia y quién se queda atrás?

Donna Andrews

Tomar el control del dinero, conocer su ubicación y magnitud, y exigirlo son tareas fundamentales. En el centro de la soberanía energética están las cuestiones relativas a su propósito, sus beneficiarios, su financiación y la necesidad de garantizar que los costos no recaigan sobre quienes ya están agobiados. Judith, el trabajo que ha realizado *GreenPaths*, el proyecto de investigación de *Horizon Europe* que tú coordinas, sobre financiación climática, es muy pertinente para este tema, ¿verdad?

Judith Clifton

Este tema se vincula a la cuestión de la deuda histórica y las reparaciones, que se

me han presentado de manera interesante. El evaluador de un artículo que estoy presentando para revisión me hizo una pregunta muy pertinente: ¿Cuáles son los principios que sustentan tu idea de una transición justa? ¿Invocas el concepto de deuda histórica? Todavía estoy elaborando la respuesta, pero el hecho de verme obligado a articularla ha sido realmente útil.

Permítanme hablar sobre la financiación climática desde la perspectiva del Banco Europeo de Inversiones (BEI), uno de los bancos públicos más grandes del mundo, que ha aportado la mayor parte de la financiación destinada a la transición climática en Europa. Dado que es un agente político,

obligado a implementar lo que disponga la Unión Europea, si la UE habla de una “transición justa”, el banco tiene que proporcionar una “financiación justa”. ¿Qué significa esto en la práctica?

En primer lugar, la definición de *financiación verde* es considerablemente más flexible de lo que la mayoría de la gente supone. Según la clasificación del BEI, un proyecto verde puede incluir la construcción de un aeropuerto, siempre que una parte del mismo opere con energía solar. Ese 10 % se considera financiación verde. Construir una carretera no es financiación verde, pero si esa carretera conduce a una planta de reciclaje, sí lo es. En otras palabras, la labor de definición implica un enorme esfuerzo político.

Segundo: al examinar adónde va realmente toda la financiación verde, solo podemos localizar alrededor de la mitad. La otra mitad no puede rastrearse. Podría decirse, con benevolencia, que esto se debe a que gran parte fluye a través de PYMES e intermediarios financieros, lo que dificulta enormemente su seguimiento. Pero el problema persiste: no podemos contabilizar la mitad del dinero.

Tercero, y lo más perjudicial: al preguntarnos si el dinero se destina de forma desproporcionada a las localidades más vulnerables. Utilizando un índice de vulnerabilidad desarrollado por el investigador de la LSE, Andrés Rodríguez-Pose, la respuesta es no. También analizamos las zonas rurales, las regiones periféricas y los llamados lugares olvidados asociados al auge de la extrema derecha en Europa. ¿Se destina más dinero a esos lugares, ya sea por razones de legado histórico o de equidad basada en las necesidades? No. La razón principal es procedimental: para obtener la financiación, hay que solicitarla. Si eres una comunidad pequeña con

capacidad institucional limitada, solicitar ese dinero resulta realmente difícil. El resultado es totalmente predecible: las grandes ciudades, con instituciones sólidas, acaparan la mayor parte de la financiación climática.

Uno de los revisores de nuestro artículo sugirió que esto podría ser racional, al concentrar la inversión donde se expande más rápidamente. Ahora estoy argumentando en contra de esa postura y definiendo qué principios citaré: reparaciones históricas, equidad basada en las necesidades o algo similar. El argumento de que no sabemos a dónde va la mitad del dinero y que, proporcionalmente, más va a los ya privilegiados, no es aceptable, pero necesitamos un marco normativo claro para explicar por qué.

Mark Swilling

Dos por ciento. Ese es el porcentaje de la financiación verde a escala mundial que ha llegado a África en las últimas dos décadas, en un continente que simplemente no puede electrificarse con combustibles fósiles si queremos cumplir con los objetivos climáticos. La contradicción es evidente.

“ *Dos por ciento. Ese es el porcentaje de la financiación verde a escala mundial que ha llegado a África en las últimas dos décadas, en un continente que simplemente no puede electrificarse con combustibles fósiles si queremos cumplir con los objetivos climáticos. La contradicción es evidente.*

Dado que las condiciones geopolíticas para las transferencias internacionales de financiación climática a gran escala a África no mejoran, la pregunta clave es: ¿cómo puede el continente movilizar el

capital que ya tiene a su alcance? El Banco Africano de Desarrollo ha comenzado a tomar esto en serio, pero el desafío es enorme.

Los flujos financieros que caracterizan actualmente a Sudáfrica, donde el 45% del

capital de las pensiones sale del país y solo el 2% se destina a inversiones en infraestructura, son perjudiciales para los pobres y profundamente destructivos para la inversión productiva. Recircular ese capital a nivel nacional representa un importante desafío político y regulatorio.

2.6 La transición energética de Sudáfrica: un caso paradigmático sobre opciones limitadas

Mark Swilling

Las centrales eléctricas de carbón de Sudáfrica tienen, en promedio, 42 años de antigüedad. Para 2030, debemos cerrar el 25% de la capacidad existente. Formo parte del consejo de administración de la empresa que gestiona la red nacional de transmisión y puedo asegurarles que no es una metáfora: si no las cerramos, se cerrarán solas. La infraestructura se ha amortizado, aunque también hemos contraído una deuda considerable por todo tipo de motivos, incluida la corrupción. Comparen esto con otros países que cuentan con centrales térmicas relativamente nuevas. Nuestra situación es diferente. No tenemos otra opción que cerrar esas plantas basadas en carbón.

No tenemos gas, montar plantas de energía nuclear tarda demasiado y ningún prestamista internacional financiará nuevas centrales basadas en carbón. Solo tenemos una opción real: energía fotovoltaica y eólica, además de baterías y algún respaldo de gas. Actualmente, tenemos unos 30 gigavatios de capacidad renovable aprobada y en construcción, pero que no pueden conectarse a la red porque la infraestructura nacional de transmisión ha sufrido una falta crónica de inversión.

El mayor programa de infraestructura desde el fin del apartheid en 1994 ya está en marcha: una expansión de la red eléctrica nacional de 400 mil millones de rands, alrededor de 21 mil millones de euros. Nuestra red, si trazamos una línea desde Bilbao hasta Estambul, cubre aproximadamente esa distancia. Es una obra de ingeniería de gran envergadura que puede impulsar la industrialización, ya que requiere una constelación de infraestructura y empresas para su ejecución.

Sí, al cerrar las centrales eléctricas de carbón, algunas personas perderán sus empleos. Pero muchas otras encontrarán trabajo en otras zonas. En un informe que preparé recientemente para la Comisión Nacional de Planificación, que rinde cuentas directamente al presidente, la conclusión fue clara: la transición a un sistema energético basado en energías renovables en Sudáfrica es la opción más económica entre las alternativas actuales. En un país con abundante capital, donde podríamos financiar toda la transición con recursos nacionales sin endeudarnos, lo que determinará el éxito o el fracaso no es el dinero ni la tecnología, sino la certeza regulatoria y política. Lo que podemos elegir es si hacerlo bien o arruinárnoslo.

2.7 Contradicciones, coaliciones y el horizonte más allá

Donna Andrews

Lo que queda más claro de todo lo dicho hoy es la importancia de visibilizar las contradicciones en lugar de ignorarlas. Incluso en el caso de Sudáfrica, donde existe el dinero, la tecnología está disponible y el camino es, en cierto modo, conocido, la tarea fundamental consiste en explicitar y someter a debate las decisiones distributivas, en lugar de permitir que se acumulen de forma invisible en manos de quienes tengan la capacidad institucional para gestionar el proceso. Esto significa garantizar que todos los que deben estar presentes al tomar esas decisiones lo estén de verdad. También implica insistir en que el Estado desempeñe un papel no como árbitro neutral, sino como regulador y actor clave del lado de la sociedad. Reconocer y nombrar las contradicciones es, en sí mismo, un acto político.

Mabel Thwaites Rey

Nuestro objetivo aquí y en este proyecto es combinar el conocimiento técnico con aquel que realmente pueda tener un impacto transformador.

Los dilemas son reales y no pueden resolverse simplemente adoptando la postura teórica supuestamente correcta. Por ejemplo, consideremos Vaca Muerta, una vasta formación geológica de esquisto en el norte de la Patagonia. Representa una oportunidad histórica para generar ingresos, pero también conlleva enormes riesgos ambientales y sociales. Estas contradicciones requieren una cuidadosa consideración política basada en los intereses concretos de una sociedad concreta. Construir esa solidaridad, y hacerlo juntos, debe ser una parte fundamental de nuestro trabajo de investigación.

³ Sokona, Y., Mulugetta, Y., Tesfamichael, M., Kaboub, F., Hällström, N., Stilwell, M., Adow, M., y Besaans, C. (2023). *Just transition: A climate, energy and development vision for Africa*. Independent Expert Group on Just Transition and Development.

⁴ Project website: GreenPaths - European Knowledge Hub on Just Transition Pathways: <https://greenpaths.info/>

⁵ Lebdioui, A. (2025). Five principles of an internationalist just transition to overcome the traps of the 'green' economy. In *Energy transitions: Just and beyond*. Alameda Institute. <https://alameda.institute/publishing/energy-transitions/>




Publicidad de una compañía local que energía que ofrece servicios de recarga para vehículos eléctricos, frente a la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Viena, Austria. Foto: Daniel Chavez.



Amir Lebdioui: Las EPN no son meras recaudadoras de rentas. Han acumulado importantes capacidades de ingeniería en todo el proceso de extracción: ingeniería química, conocimiento de sistemas energéticos e infraestructura de oleoductos, todas ellas directamente transferibles a las cadenas de suministro de energía limpia.





La transición de la transición

3

El segundo panel reunió a académicos, ex altos funcionarios de la industria petrolera y representantes del sindicalismo de América Latina, Asia Central y Estados Unidos para analizar el papel de las empresas petroleras nacionales en la transición energética desde la perspectiva del Sur Global.

La conversación fue moderada por **Miguel Virizuela** (Universidad del País Vasco). Participaron **Tatiana Roa Avendaño** (Universidad Andina Simón Bolívar), **José Sergio Gabrielli de Azevedo** (Universidad Federal de Bahía), **Serik Orazgaliyev** (Universidad Nazarbayev, Kazajistán), **Sean Sweeney** (Sindicatos por la Democracia Energética) y **Ticiano de Oliveira Alvares** (INEEP, Brasil, TUED).

Las palabras de clausura estuvieron a cargo de **Daniel Chavez**, investigador principal del proyecto S-OIL.

La transcripción ha sido editada para mayor claridad y reorganizada temáticamente.

3.1 ¿Son las compañías nacionales de petróleo una ventaja o un obstáculo para la transición?

Miguel Virizuela

Nuestro panel estará centrado en las presiones estructurales que enfrentan los países exportadores de petróleo del Sur Global y en el impacto de la descarbonización. La intención es discutir las presiones estructurales que hoy enfrentan los países ricos en hidrocarburos, los distintos actores que operan en la industria petrolera, incluidas las empresas estatales, y cómo todos estos factores configuran el doble reto de avanzar en la transición y, al mismo tiempo, alcanzar metas de desarrollo nacional.

Para abrir la discusión: cuando un país cuenta con empresas estatales que no solo extraen, sino que también exportan petróleo o gas, ¿es eso una ventaja para afrontar la transición o es un reto? Ya escuchamos, en el primer panel, un ligero sesgo a favor de la gestión pública de estos activos, y me gustaría profundizar en el análisis.

Empezaré con Tatiana, quien fue hasta hace poco viceministra de Ambiente en Colombia y ha recorrido el camino que va del activismo por la transición energética a la toma de decisiones en un gobierno. Una vez abierta la discusión de manera más amplia, podremos profundizar en la perspectiva macro con José y, a partir de ahí, adentrarnos en la micropolítica de la transición con el resto de los panelistas.

Tatiana Roa Avendaño

Permítanme primero saludar a todos los participantes y a mis compañeras y compañeros de panel, y hacer una aclaración. Hablaré desde la perspectiva de una

académica y una activista. Me gradué de la Universidad Industrial de Santander y actualmente doy clases en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Vamos a la pregunta. Las compañías petroleras, sean públicas o privadas, no son empresas corrientes. Son instituciones que organizan todo un régimen socioecológico cimentado en la extracción de combustibles fósiles. Históricamente, han articulado el Estado, el capital y el control territorial para sostener ese régimen de energía fósil. La pregunta pertinente, por tanto, no es solo si la propiedad es pública o privada, por importante que ello sea. La pregunta de fondo es cómo transformar ese régimen en el que actualmente vivimos.

“ Las compañías petroleras, sean públicas o privadas, no son empresas corrientes. Son instituciones que organizan todo un régimen socioecológico cimentado en la extracción de combustibles fósiles. ”

Replantear la pregunta de ese modo nos obliga a considerar qué relación entre sociedad y naturaleza presuponen dichas compañías, dado que fueron creadas, ante todo, para administrar y expandir la renta fósil. En Colombia vivimos de esa renta, como ocurre en muchos otros países extractores de petróleo. Incluso rechazaría la descripción que habitualmente se nos da. No somos “países productores de petróleo” en ningún sentido significativo: somos países extractores que han sostenido un

metabolismo energético organizado en torno a la extracción y la exportación de crudo antes que de productos procesados. Ese metabolismo sostiene un tipo particular de sociedad. La extracción de petróleo ha reorganizado nuestros territorios, transformado culturas y relaciones sociales y, en muchos casos, ha devastado

ecosistemas enteros.

Desde esta perspectiva, las compañías nacionales de petróleo solo podrían avanzar hacia la transición si transformaran el propio modelo energético, transformaran su relación con los territorios y empezaran a romper su dependencia de la renta fósil.

3.2 Petrobras y el disputado proyecto de desarrollo nacional

Miguel Virizuela

Gracias, Tatiana. Hice una pregunta más bien acotada y tú has revelado el desafío más profundo: un cambio civilizatorio, tanto en los países extractivos del Sur global como en el Norte global. Toda esa infraestructura material, todas esas dinámicas fósiles, tendrían que revertirse si queremos deshacer la subordinación de la trama de la vida al orden fósil.

Volviendo al planteamiento inicial, quisiera dirigirme a José. Tú presidiste una de las mayores compañías petroleras nacionales de América Latina, una organización que no solo es un actor global de primer orden en gas y petróleo, sino también un actor fundamental del desarrollo nacional, que impulsa políticas culturales, programas sociales y el fomento de la industria brasileña.

Durante tu gestión, la extracción de petróleo se expandió de manera sustancial. Mirando hacia atrás, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste? ¿Cómo se alineó Petrobras con la agenda de desarrollo brasileña y qué inversiones podrían (o no) haberse realizado para utilizar a Petrobras como agente clave de la transición y de la agenda más amplia de descarbonización que Tatiana acaba de esbozar?

José Sergio Gabrielli de Azevedo

Gracias, Daniel, por la invitación, y gracias a todos por la bienvenida. Debo decir, de entrada, que dejé Petrobras hace 13 años. Hoy soy consultor; no tengo relación actual con la empresa y hablo desde mi propia experiencia, no en su nombre.

Mi primer punto es que las EPN no pueden encuadrarse en una única tipología. Difieren entre sí de maneras fundamentales. Petrobras es muy distinta de Pemex en México o de la National Iranian Oil Company. Petrobras fue el resultado de un fuerte movimiento social en los años cincuenta, movilizado contra las compañías internacionales para crear una empresa nacional. Desde el comienzo fue propiedad estatal, pero siempre mantuvo una parte de su capital cotizando en el mercado.

Petrobras no empezó con petróleo. Tuvo que encontrar petróleo, desarrollar la tecnología para extraerlo y construir la burocracia técnica capaz de hacerlo. Durante varios años encontró muy poco. Las pequeñas cantidades que producía se procesaban en refinerías concebidas para el crudo ligero de Argelia y Nigeria, y la distribución de productos petroleros en Brasil estaba controlada por Shell y Exxon. Petrobras tuvo que competir con ellas,



Diana Romero, una de las ingenieras ambientales de Ecopetrol en la reserva natural La Tayra Lizama, creada por la empresa en el sitio de un derrame de petróleo en el año 2018, cerca de Barrancabermeja, Colombia. Foto: Daniel Chavez.

“

Tatiana Roa: No somos “países productores de petróleo” en ningún sentido significativo: somos países extractores que han sostenido un metabolismo energético organizado en torno a la extracción y la exportación de crudo antes que de productos procesados. Ese metabolismo sostiene un tipo particular de sociedad.

desarrollar sus propias refinerías y, con el tiempo, construir una capacidad de refinación equivalente a toda la producción nacional. La última gran refinería antes de 2014 se terminó en 1980. Para entonces, Brasil producía alrededor de 2 millones de barriles diarios y consumía aproximadamente lo mismo, esencialmente al margen del mercado internacional.

El descubrimiento del presal lo cambió todo. El presal es una enorme reserva de petróleo y gas en aguas ultraprofundas, atrapada bajo una gruesa capa de sal frente a la costa sur del país. Ese vasto yacimiento transformó la posición de la compañía. Hoy, Brasil produce más de 4 millones de barriles diarios y exporta 1,6 millones, lo que lo convierte en el cuarto exportador de petróleo del mundo. Seguimos siendo importadores de productos refinados porque el consumo brasileño ha crecido más rápido que la capacidad de refinación: hoy consumimos cerca de 2,6 millones de barriles diarios y producimos 2,3 millones, por lo que importamos la diferencia.

“ *Petrobras no empezó con petróleo. Tuvo que encontrar petróleo, desarrollar la tecnología para extraerlo y construir la burocracia técnica capaz de hacerlo.* ”

Todo ello fue el resultado de una combinación de políticas de gobierno y de empresa. Petrobras desarrolló una sólida burocracia técnica y elaboraba sus propios planes estratégicos quinquenales. El gobierno proporcionaba el marco general y las prioridades estratégicas sin interferir

en las decisiones cotidianas.

Durante mis diez años como presidente ejecutivo, destacaría tres grandes decisiones estratégicas. La primera fue el fortalecimiento del contenido nacional en las compras: todo lo que pudiera producirse en Brasil se produciría allí. Con el presal, la política adquirió una escala enorme. El programa de inversión quinquenal alcanzó cerca de 250.000 millones de dólares, comparable en tamaño al Plan Marshall. Petrobras, por sí sola, requería un tercio de la flota mundial de plataformas de perforación en aguas profundas, y decidimos que la expansión global de la capacidad necesaria para satisfacer esa demanda debía tener lugar en Brasil, apoyándose en la estructura industrial existente.

La segunda fue la expansión de los biocombustibles. Que yo sepa, Brasil es el único país del mundo donde los camiones funcionan con 15 % de biodiésel y los automóviles con 27 % de etanol. La decisión se tomó en 2006, y Petrobras se reorganizó para producir biodiésel y etanol.

La tercera fue la arquitectura regulatoria del propio presal, que se originó dentro de Petrobras y no en el gobierno. Definimos el concepto de “área estratégica”, sacamos el presal de las subastas de concesiones convencionales y propusimos un contrato de reparto de producción que rompía con el régimen concesionario anterior. El gobierno adoptó esas ideas. Para entonces, Petrobras se había vuelto lo bastante importante en la sociedad brasileña como para proponer cambios en la estructura regulatoria del país, y no solo responder a ellos.

3.3 Geopolítica, estados sin litoral y el caso kazajo

Miguel Virizuela

Serik, José ha planteado cuestiones de soberanía, autonomía y de lo que implica una agenda de desarrollo en términos de capacidad tecnológica y recursos humanos. El caso de Petrobras demuestra cómo construir una EPN. Desde una posición geográfica y geopolítica muy distinta, Kazajistán no solo es un actor importante en el sector del gas y del petróleo, sino que además está situado entre Rusia, China y Europa. ¿Cómo se ve desde allí la agenda de desarrollo nacional y qué restricciones impone la geopolítica, especialmente en la complacida actualidad?

Serik Orazgaliyev

La pregunta toca el núcleo de las restricciones bajo las que operan tanto el país como el sector de hidrocarburos. Kazajistán se independizó en 1991 y está situado en el centro de Eurasia. Cuando la Unión Soviética colapsó, el país heredó una infraestructura de exportación profundamente interconectada con Rusia y las demás repúblicas centroasiáticas. Para exportar petróleo tuvimos que trabajar estrechamente con nuestros vecinos, incluidos los antiguos estados soviéticos, para llegar a los mercados mundiales.

La industria petrolera necesitaba inversión y tecnología, de modo que, desde comienzos de los años noventa, el gobierno decidió abrir el sector a los inversores extranjeros. La propiedad privada había sido impensable bajo el sistema soviético, y la inversión extranjera resultaba casi tan impensable.

Un tercer elemento fue la diversificación de las rutas de exportación, y aquí China importa. La *Iniciativa de la Franja y la Ruta* se anunció en Kazajistán; en ese sentido, podría decirse que empezó con nosotros. Llegamos a depender de nuestro vecino oriental para construir los oleoductos que diversificaron nuestras exportaciones hacia Asia. Antes, las exportaciones fluían únicamente hacia el mar Negro, y esa ruta se encuentra ahora en una situación muy difícil: la guerra en Ucrania continúa y las terminales del mar Negro son blanco frecuente de operaciones militares. La estrategia de diversificación ha demostrado, por tanto, ser acertada.

Otras puertas siguen cerradas. Oriente Próximo atraviesa una nueva oleada de conflictos bélicos e Irán, con quien compartimos el mar Caspio, sufre bloqueos. La ruta más corta y económica para que el petróleo centroasiático llegue a los mercados mundiales sería a través de Irán hasta el Golfo Pérsico. En 30 años todavía no se ha construido. La región está tan interconectada que las sanciones a un país reconfiguran las posibilidades de integración de todos los demás, no solo para Kazajistán, sino también para Turkmenistán, Azerbaiyán y varios otros estados situados alrededor del Caspio.

El único acceso marítimo de Kazajistán es al Caspio, que, a su vez, es un mar interior. Para los países sin litoral, la geografía y la geopolítica pesan de manera particular sobre los términos de integración en los mercados energéticos mundiales.

3.4 “No hay transición”. La crítica a la descarbonización liderada por el mercado

Miguel Virizuela

Con demasiada frecuencia, en el mundo académico se discute la descarbonización como si nada hubiera ocurrido en los últimos cinco años. Sin embargo, desde las guerras en Ucrania e Irán, la agenda política se ha vuelto considerablemente más compleja. Cabe sostener que operamos en un régimen de guerra tendencialmente opuesto a la descarbonización. Sean, ¿podrías hablar de lo que está ocurriendo con la agenda de la transición, del papel central que los intereses de mercado desempeñaron en su diseño original, especialmente en el Norte Global, y de los debates sobre la planificación de la descarbonización?

Sean Sweeney

Gracias, compañeros. Presentaré el análisis de un conjunto de sindicatos de la salud, la educación, el transporte y la energía que forman parte de la red *Trade Unions for Energy Democracy* (TUED). A quienes ya forman parte de TUED, gracias por su apoyo constante; a quienes aún no están dentro, los invitamos a sumarse, pues TUED propone un enfoque multisindical y multisectorial.

Nuestro mensaje central es sencillo. En este momento, no hay ninguna transición energética en marcha. Hay cambios en el sistema energético, pero están marcados por una expansión de todas las formas de energía, impulsada por una demanda creciente. El carbón, el petróleo, el gas, las renovables y, en cierta medida, la energía nuclear y la hidroeléctrica se expanden

todos debido a la fijación del sistema capitalista en el crecimiento económico. Es ilusorio hablar del fin de los combustibles fósiles si no entendemos el mercado o los intereses económicos que impulsan esa agenda.

El compromiso con la descarbonización no provino del mercado, sino de la acumulación de evidencia científica desde la década de 1990. En 2006, sir Nicholas Stern publicó su estudio muy influyente sobre la economía del cambio climático. Yo asistí al seminario en la Universidad de Columbia en el que Stern, Jeffrey Sachs y Joe Stiglitz presentaron el informe. Stern sostenía que el coste de la descarbonización quedaría empujado frente al daño al PIB provocado por el cambio climático, que situaba por encima del daño combinado de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. Son puntos de referencia del Norte Global, pero el planteamiento resultaba llamativo.

Sentado entre el público, yo pensaba: “este tipo debe de estar loco”. Stern argumentaba que las enormes inversiones requeridas serían asumidas por el sector privado, con apoyo de subsidios e incentivos estatales, y que allí donde no existieran mercados, la política pública los crearía. Pónganse por un momento en la mente de un inversor capitalista. No contempla el daño climático desde una perspectiva a 50 años. Está mirando cómo ganar dinero ya con la protección del clima. Sin un empujón político, la respuesta racional es seguir con el negocio de siempre. Ese ha sido el papel de las compañías petroleras.



Activistas climáticos de microestados insulares del Pacífico marchando por las calles de Santa Marta, Colombia, durante la Primera Conferencia de Salida de los Combustibles Fósiles, abril de 2026.. Foto: Daniel Chavez.

“

Sean Sweeney: El carbón, el petróleo, el gas, las renovables y, en cierta medida, la energía nuclear y la hidroeléctrica se expanden todos debido a la fijación del sistema capitalista en el crecimiento económico. Es ilusorio hablar del fin de los combustibles fósiles si no entendemos el mercado o los intereses económicos que impulsan esa agenda.

Esta mañana, cuando Daniel presentó la racionalidad y los objetivos del proyecto S-OIL, mostró un gráfico de la Agencia Internacional de la Energía que sugería que las compañías de combustibles fósiles están ante el momento de la verdad. Ese informe fue elaborado en 2023 y se publicó a comienzos de 2024. Si uno mira ahora los documentos de la AIE, en gran medida restan énfasis a la descarbonización. Y no están solos. El mundo capitalista no es capaz de imaginar una bonanza lucrativa en la descarbonización sin subsidios masivos ni sin que los gobiernos asuman los riesgos, y solo un pequeño puñado de estados ricos puede sostenerlos de manera consistente. La Unión Europea puede hacerlo en medida cada vez menor. El marco de políticas, por tanto, se está desmoronando con rapidez.

“ En este momento, no hay ninguna transición energética en marcha. Hay cambios en el sistema energético, pero están marcados por una expansión de todas las formas de energía, impulsada por una demanda creciente.

Miren la pasada administración de Joe Biden en Estados Unidos. Biden aprobó lo que se anunció como la ley climática más grande y ambiciosa de la historia, presentada como base para la reindustrialización de los Estados Unidos. Donald Trump la desmanteló. La cuestión no es si Trump es el problema, sino por qué hubo tan poca resistencia al retroceso. Los demócratas,

como muchos partidos socialdemócratas y centristas de Europa, sabían que el mensaje de que se podía ganar dinero con la descarbonización, en su día atractivo para los inversores, ya no resonaba. No están dando la pelea para salvar la misma política que ellos lanzaron.

Nuestra tarea en el movimiento sindical no consiste, por tanto, en preguntar “¿y los trabajadores, y la transición?” como si hubiera una transición sobre la mesa. El punto de partida tiene que ser reconocer que, en la práctica, no hay ninguna transición sobre la mesa. Los compromisos de París no se están cumpliendo. Nos enfrentamos al fracaso político catastrófico de intentar descarbonizar un sistema capitalista basado en el afán de lucro.

La siguiente fase de la política climática tiene que anclarse en bienes públicos globales: el acceso a las tecnologías y un enfoque compartido del riesgo, no guiado por el lucro. Eso es lo que llamamos *la vía pública*, una alternativa al modelo neoliberal. La idea de que las compañías petroleras harán o malograrán la transición debe ser cuestionada. Las compañías petroleras se mueven con la corriente política y, en este momento, nunca han tenido una mejor oportunidad de ganar más dinero.

Necesitamos una nueva arquitectura política capaz de lograr una descarbonización compatible con la ciencia, con los compromisos de París y con el sistema multilateral en su mejor versión. Todavía no estamos ahí, y eso es lo que nuestro trabajo en este proyecto y en proyectos similares tiene que abordar.

3.5 La perspectiva de los trabajadores: una transición justa, soberana, nacional y popular

Miguel Virizuela

Sean nos ha recordado que los trabajadores y los sindicatos deben ser centrales en cualquier discusión seria sobre la transición. Ticiania, tu investigación en el Instituto de Estudios Estratégicos del Petróleo, el Gas Natural y los Biocombustibles (INEEP) adopta precisamente esa perspectiva sobre la industria del petróleo y del gas en Brasil. ¿Qué posiciones están emergiendo allí y cómo se relacionan con el debate brasileño más amplio?

Ticiania de Oliveira Alvares

Gracias, Daniel, por la invitación. La iniciativa que subyace a este proyecto, que sitúa a las empresas estatales con un rol desarrollista en la transición, es muy bienvenida. El INEEP, el instituto donde trabajo, fue creado por la Federación Única de los Petroleros precisamente para realizar estudios estratégicos que sitúen el sector energético en un proyecto de desarrollo nacional.

Desde nuestra perspectiva, el debate sobre la transición energética en Brasil trata, ante todo, de cómo repensar un proyecto de desarrollo nacional en el que el sector energético sea un vector clave. Las nuevas tecnologías, los empleos verdes y las capacidades industriales están todos en juego. Cuando la transición energética se discute en el Sur Global, el encuadre suele importarse del Norte y no necesariamente encaja con las realidades de países como el nuestro.

José ha recordado la historia de Petrobras. Brasil fue muy inventivo a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta

en respuesta a la crisis de seguridad energética. Construimos Itaipú, en su momento la mayor central hidroeléctrica del mundo, junto con Paraguay, como un proyecto binacional de integración. Iniciamos la exploración petrolera en alta mar. Lanzamos los biocombustibles a través del programa Proálcool. Todo ello se planteó como respuesta a la seguridad energética. Cincuenta años después, la seguridad energética vuelve a impulsar la transición energética. Cuando Alemania le dice al mundo cómo debería ser la transición, está respondiendo a su propio interés nacional y al imperativo de evitar la dependencia y la vulnerabilidad.

“ La siguiente fase de la política climática tiene que anclarse en bienes públicos globales: el acceso a las tecnologías y un enfoque compartido del riesgo, no guiado por el lucro. Eso es lo que llamamos la vía pública, una alternativa al modelo neoliberal.

En el Sur global, enfrentamos la transición energética y la descarbonización, junto con otro problema que rara vez se reconoce en los debates del Norte global: la pobreza energética. Mucha gente todavía no puede acceder a servicios energéticos. La matriz eléctrica de Brasil ya es renovable en un 90 % y la matriz energética global ronda el 50 %. Nuestro sector energético representa apenas alrededor del 18 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, muy distinto del de los países desarrollados. Nuestros problemas no son los mismos, y nuestras soluciones pueden

ser diferentes.

Lo que los trabajadores y los sindicatos sostienen en este debate es que no puede haber una transición en Brasil que no coloque la energía en el centro de un proyecto de desarrollo nacional y de una nueva base industrial. La industria del petróleo y el gas en Brasil genera más de 200.000 empleos de alta calidad y representa más del 13 % del PIB industrial. Si detuviéramos de un día para otro la extracción y la producción de petróleo, ¿qué pondríamos en su lugar? Las renovables ya son una realidad en Brasil. Tenemos energía hidráulica, solar y eólica en cantidades significativas. Pero la instalación de parques eólicos y solares no ha generado empleos de calidad, ha sido muy disruptiva para las comunidades locales y, en el nordeste, donde la desigualdad ya es más profunda, ha generado nuevos problemas en lugar de promover la inclusión energética. El precio de la energía no ha bajado para los usuarios residenciales. No ha habido un contenido nacional en la producción comparable al observado en la década anterior en el sector del petróleo y el gas.

3.6 Más allá de la civilización petrolera: transformación cultural y los límites de la reforma

Miguel Virizuela

Tatiana, pasaste muchos años como activista fuera del Estado, oponiéndote a la devastación social y ambiental causada por la extracción de petróleo, y, más recientemente, has ocupado un cargo de mucha responsabilidad en el gobierno colombiano. ¿Podrías hablar de la contradicción entre la agenda ambiental y los impactos de la industria petrolera?

Estas son algunas de las contradicciones del proceso actual. Brasil ha dado pasos significativos en la diversificación energética, aunque dudo en llamarlo una transición, porque la producción de petróleo y gas no ha disminuido. Desde la perspectiva de los trabajadores, sostenemos que la transición energética debe ser *justa, soberana, nacional y popular*. Para lograrlo, necesitamos desarrollar nuevas industrias verdes que avancen genuinamente hacia la transición, pero también necesitamos pensar en términos de adaptación climática, porque los eventos extremos continuarán incluso si las emisiones se detuvieran hoy: los cambios ya están en marcha. La adaptación es, en sí misma, una oportunidad para planes de desarrollo rápido e infraestructuras que permitan a nuestras ciudades absorber los cambios ya en marcha. La coordinación estatal y el despliegue de las compañías nacionales de petróleo como instrumentos deben avanzar de la mano. Las EPN deben convertirse en parte de la solución, tanto en la adaptación como en el desarrollo de nuevas tecnologías verdes.

Tatiana Roa Avendaño

He pasado muchos años impulsando el debate sobre la transición y la crítica a lo que hemos llamado *la civilización petrolera*. Cuando digo "nosotros", me refiero a quienes hemos formado parte de Oilwatch, una red internacional.

Daniel comenzó su presentación sobre el proyecto S-OIL con una idea que reaparece en este tipo de debates: que



Detalle de la bomba de extracción de Infantas 2, el primer pozo petrolero comercial de Colombia, inaugurado por la Compañía Petrolera Tropical en abril de 1918, en la región del Magdalena Medio. Foto: Daniel Chavez.



Daniel Chavez: A muchas naciones africanas, latinoamericanas y asiáticas se les está pidiendo, en esencia, que abandonen su principal fuente de riqueza sin una alternativa viable: sin el capital, la tecnología ni las alianzas necesarias para la transición a una economía post-carbono.

dependemos profundamente del petróleo y que somos una "civilización petrolera". Yo uso esa expresión en un sentido concreto, pero el concepto merece ser discutido. Hemos aceptado cambiar el algodón por el plástico. Decidimos consumir alimentos que cargan enormes costes energéticos porque viajan por todo el mundo antes de llegar a nuestras mesas, aun cuando, en países como Colombia, buena parte de ellos podría producirse localmente. Movemos mercancías en barcos que queman diésel, a menudo mercancías que aportan muy poco a nuestras vidas. Nos han hecho creer que dependemos de esto, que no es posible otro mundo y que el petróleo es más importante que el agua. Es una civilización que asume que no se puede vivir sin petróleo si se mantienen los niveles de consumo actuales. Somos más bien como una familia que recibe una gran herencia y la malgasta en muy poco tiempo. Nuestra civilización occidental ha consumido la dotación de petróleo en apenas algo más de un siglo. La crítica que formulamos se dirige al modo en que el petróleo ha moldeado nuestras vidas, nuestras ciudades y territorios, ha transformado nuestra alimentación, ha reorganizado nuestras formas de movilidad y consumo e incluso ha contribuido a definir nuestras aspiraciones, imaginarios y deseos.

Censat Agua Viva, la organización de la que yo formaba parte, comenzó a articular el debate sobre la transición en Colombia intentando reunir a sectores de la sociedad que a menudo terminan enfrentándose: trabajadores de la energía y ambientalistas, que son, al fin y al cabo, gente de clase trabajadora que ocupa posiciones distintas. Emprendimos un estudio de los usos del petróleo que hay que dejar atrás y de aquellos que seguirán requiriendo un horizonte a largo plazo. La esencia de

nuestra posición es que la transición debe ser, ante todo, una profunda transformación cultural. Tiene que cambiar lo que damos por sentado, lo que nos resulta natural y lo que se ha incorporado a nuestros cuerpos y a nuestros territorios.

Lo que quisiera subrayar ahora, tras dos años en un lugar en el que nunca imaginé estar, en un alto cargo del Estado, con el desafío que el gobierno colombiano se ha fijado de transformar una empresa petrolera nacional en una compañía integral de energía, es que varios elementos sobresalen y merecen más atención de la que suelen recibir.

El primero es la economía política en sentido amplio. Somos países dependientes de las rentas petroleras. Hay dependencia laboral y territorial. Los Llanos Orientales de Colombia, que hace apenas 50 años dependían fundamentalmente de la agricultura, hoy son conocidos como "regiones petroleras". Me niego a llamarlos así. Reducir territorios tan diversos a la noción de "regiones petroleras" oscurece lo que son y han sido. La pregunta, entonces, es cómo se construyen economías alternativas, cómo nuestros países dejan de depender de las rentas petroleras y del extractivismo que nos ha moldeado casi desde la formación misma de nuestros estados.

Un segundo elemento es la arquitectura normativa. En Colombia, la Ley 142 (que Daniel y yo estudiamos hace algunos años en el marco de otro proyecto de investigación) fragmenta el sector eléctrico e impone que una compañía petrolera, nacional o extranjera, opere plenamente en él y se convierta así en una compañía energética en un sentido integral. Las generadoras de electricidad de Colombia, muchas de ellas empresas nacionales y varias españolas, hoy ocupan posiciones que no tienen

intención alguna de ceder. Transformar la arquitectura normativa es, por tanto, parte de la propia transición.

Un tercer elemento son los subsidios. El sector petrolero ha recibido históricamente no solo subsidios económicos, sino también sociales y ambientales, porque los costes de la industria no se reflejan en su precio. Las regiones absorben esos costes en sus territorios, en las condiciones de trabajo, en la degradación ambiental y en el alza de los costes locales que recaen sobre trabajadores que no forman parte de la minoría privilegiada empleada directamente por la industria.

Para nosotros, la pregunta es cómo la transición redistribuye los costes. ¿Cómo diseñamos una transición que no reproduzca las mismas desigualdades que ha producido el actual orden fósil, y que el giro hacia un nuevo orden basado en las renovables ya está reproduciendo? Sin una profunda transformación cultural, nada de esto será posible.

Quiero añadir un punto más sobre el papel de EPN en la transición. Coincido con José cuando sostiene que las EPN no son todas iguales. Surgieron en contextos distintos y no son neutrales. No nacieron para

transformar el metabolismo energético. Nacieron, como argumenté antes, para administrar y expandir la renta fósil. La cuestión de cómo operarán durante la transición no es, por tanto, ni únicamente cultural ni únicamente una cuestión de propiedad. Es también una cuestión del sistema económico, fiscal y financiero global, que premia la expansión de las reservas. Una compañía petrolera cuyo índice de reposición de reservas cae es penalizada por cada parámetro con el que se la mide en los mercados. Ese es el marco en el que las compañías nacionales están entrando en el negocio energético más amplio.

El régimen se ha sostenido sobre estados dependientes de la renta, el sistema financiero global, la infraestructura fósil, las relaciones geopolíticas y la pura inercia material. Estamos rodeados de oleoductos e infraestructura fósil de todo tipo, en particular de la infraestructura del automóvil, que organiza buena parte de nuestra vida cotidiana. Transformar eso exige transformar el tejido institucional, las políticas, las infraestructuras y, sobre todo, las relaciones de poder, porque no deberíamos subestimar el inmenso poder que este sector ha tenido en la configuración del orden mundial.

3.7 Una transición de la transición: planificación, propiedad pública y el contrato social

Miguel Virizuela

La complejidad de estas cuestiones es evidente, y tenemos cinco años por delante para empezar a desenredarlas. Reflexionando sobre la intervención de Tatiana, quisiera subrayar dos referencias intelectuales que Daniel mencionó antes y que

aquí me resultan útiles. La primera es el libro *Lifeblood*, de Matthew Huber, que expone la arquitectura social que posibilitó la civilización fósil. El problema no es solo que la industria no pague por sus emisiones de carbono. Es también que el transporte aéreo ha sido subsidiado, que la propiedad individual del automóvil se

promovió mediante políticas públicas, que la expansión urbana dispersa nos ha vuelto más dependientes del coche, y así sucesivamente. Un vasto conjunto de políticas ha enredado a la civilización fósil occidental. La segunda es *Crude Capitalism*, de Adam Hanieh, que rastrea la arquitectura geopolítica que hizo del crudo un recurso excepcionalmente barato para el desarrollo europeo de posguerra, en el momento del Plan Marshall y a lo largo de la Guerra Fría, incluidas sus dimensiones militares.

“ ¿Cómo diseñamos una transición que no reproduzca las mismas desigualdades que ha producido el actual orden fósil, y que el giro hacia un nuevo orden basado en las renovables ya está reproduciendo? Sin una profunda transformación cultural, nada de esto será posible.

Con eso en mente, y con el tiempo agotándose, permítanme plantear una última pregunta al panel. Hay una sutil tensión en esta sala entre quienes ven a las compañías nacionales de petróleo como herramientas para el desarrollo y quienes insisten en mantener los hidrocarburos bajo tierra y acelerar la descarbonización. ¿Podría cada uno de ustedes, muy brevemente, abordar esa tensión?

José Sergio Gabrielli de Azevedo

Creo que existe una transición de la transición que es muy necesaria. Deberíamos avanzar hacia políticas que cambien la estructura del consumo, no solo la de la producción. La sociedad depende del petróleo y la transición sí requiere reducir su consumo. No se puede reducir, en el corto plazo, la producción simplemente: el capital ya está instalado, la maquinaria existe y

las condiciones de producción están dadas. Si se puede, en cambio, cambiar la estructura del consumo a distintas velocidades. Se puede mejorar el uso de otras fuentes de energía. Y, lo más importante, se pueden crear nuevas industrias basadas en tecnologías bajas en carbono. Si la política económica se desplaza en esa dirección, la transición puede avanzar, en consonancia con el argumento de Sean Sweeney de que hoy no hay ninguna transición real en marcha.

Sean Sweeney

Coincido con el llamado de Tatiana a una profunda transformación cultural. La cuestión es qué pasos concretos pueden darse para llegar allí. Sabemos que cualquier país o región que avanza en solitario tiende a estrellarse contra un muro a causa de la competencia comercial global. El debate europeo en torno al informe de Mario Draghi sobre la competitividad europea ilustra el punto. La Comisión Europea dice querer que Europa sea el primer continente con emisiones netas cero, pero no a costa de la competitividad europea. La barrera de la competencia capitalista aparece de inmediato.

Un enfoque de bienes públicos globales tiene que descansar en lo que yo llamaría una física de la cooperación. Dicho de manera sencilla, las emisiones generadas en cualquier lugar del mundo perjudican a la gente en todas partes, y las emisiones evitadas en cualquier lugar benefician a la gente en todas partes. Solo en materia de mitigación, esa es la premisa de una nueva arquitectura de cooperación global.

El desmantelamiento de las centrales eléctricas de carbón, tal como exigen el IPCC y la AIE, solo ocurrirá si existe un super-fondo global que compense no a los propietarios privados, sino a las instituciones públicas que han invertido en esa

infraestructura. Como señaló antes Mark Swilling, las centrales de carbón en Sudáfrica tienen alrededor de 45 años, y lo mismo vale, aproximadamente, para los Estados Unidos y para lo que queda del carbón europeo. El panorama de Asia-Pacífico es muy distinto. La edad media de las plantas allí es de 12 a 15 años. Lo que se nos pide es compensar a los propietarios no solo por las inversiones ya subsidiadas, sino también por la energía que habrían vendido en los mercados globales durante los próximos 30 años. Esa es una propuesta insostenible, tanto política como económicamente. Tenemos que decir: ya han ganado suficiente dinero con los combustibles fósiles a lo largo de generaciones. Los vamos a nacionalizar. Estamos formando un consorcio global de entidades públicas cooperantes para planificar la descarbonización, en el que los países más capaces (pienso en Noruega o los Estados Unidos) vayan primero porque pueden permitírselo, en línea con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas consagrado en la ONU. Países como Guyana, que han duplicado su PIB con la exploración petrolera en cinco años, no deberían ir primero.

“ La sociedad depende del petróleo y la transición sí requiere reducir su consumo. No se puede reducir, en el corto plazo, la producción simplemente: el capital ya está instalado, la maquinaria existe y las condiciones de producción están dadas. Si se puede, en cambio, cambiar la estructura del consumo a distintas velocidades.

Durante la pandemia, el secretario general de la ONU propuso un modelo global de bienes públicos para las vacunas y otras

tecnologías ambientalmente esenciales. ¿Qué ha sido de eso desde entonces? Nada. Las grandes corporaciones patentan lo que llaman sus invenciones y siguen ganando dinero. A menos que llevemos el sistema energético a la propiedad pública y al control público, junto con un nuevo mandato de descarbonización, no abordaremos la emergencia climática. La energía es central en la agenda de descarbonización. Necesitamos poseerla y gestionarla, y luego reducir su huella y su uso, en particular el de combustibles fósiles. Son pasos audaces, pero son necesarios si queremos lograr la transformación que se requiere.

Miguel Virizuela

Gracias, Sean. Un amigo nuestro estaba preocupado porque, en el panel anterior, no habíamos abordado la arquitectura jurídica de todo esto. Tenía en mente tanto los bienes públicos desarrollados tras la Segunda Guerra Mundial, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, etc., de los que Estados Unidos se ha ido retirando de manera sostenida, como los tratados de libre comercio, que institucionalizan los beneficios del arbitraje que van a parar al capital. Es un asunto de gran calado, y deberíamos conservar esa perspectiva macro y global sobre la arquitectura con la que necesitamos avanzar. Tatiana, por favor, adelante.

Tatiana Roa Avendaño

Cerraría con el papel de las compañías nacionales de petróleo en la transición. Como dije antes, las EPN no son todas iguales; surgieron en contextos distintos. Sobre todo, no son neutrales. No nacieron para transformar el metabolismo energético. Nacieron para administrar y expandir la renta. De ahí que el problema de cómo operan las compañías petroleras durante una transición no sea solo una cuestión

cultural ni solo una cuestión de propiedad. Tiene que ver con el sistema económico, fiscal y financiero global, que premia la expansión de las reservas.

Una compañía petrolera que no expande sus reservas, cuyo índice de reposición de reservas cae, es castigada por cada parámetro con el que se la mide. Ese es el marco en el que las compañías petroleras están entrando ahora en el negocio energético más amplio.

El régimen fósil se ha sostenido sobre Estados dependientes de la renta, el sistema financiero global, la infraestructura fósil, las relaciones geopolíticas y la pura inercia material. Estamos rodeados, de innumerables maneras, por oleoductos e infraestructura fósil, en particular por la infraestructura automotriz. Responder, entonces, cómo podrían estas compañías entrar en una transición exige transformar toda una institucionalidad: las políticas, las infraestructuras y, sobre todo, las relaciones de poder. No deberíamos subestimar el inmenso poder que este sector ha ejercido en la configuración del orden global.

Serik Orazgaliyev

Quisiera abordar la dimensión social de la transición energética. Para los países en desarrollo, la transición energética, tal como suele plantearse, no tiene mucho sentido en este momento. Lo que les resulta factible ahora es diversificar sus fuentes de energía. Uno de los paquetes de trabajo del proyecto S-OIL se centra precisamente en cuestiones sociales, con etnografía y antropología de por medio, y yo enmarcaría el contrato social en dos dimensiones.

La primera es un contrato social global en el que las grandes potencias regulan los

precios del petróleo. Esto es muy importante porque, para Estados Unidos, los precios del petróleo no importan mientras su Tesoro pueda emitir una cantidad ilimitada de dólares. El precio del petróleo está fuertemente regulado. Si siguiera de manera más estricta los mecanismos de mercado, creo que se asentaría en un nivel en el que las renovables podrían competir con el mercado tradicional de combustibles fósiles. Tal como están las cosas, especialmente para los países en desarrollo, construir renovables tiene poco sentido económico porque los combustibles fósiles siguen siendo baratos, y no es culpa de los países en desarrollo que sean baratos. Tenemos que tomar eso en cuenta.

La segunda dimensión es el contrato social dentro de los países, entre el Estado y la ciudadanía. En muchas naciones en desarrollo, ese contrato se ha construido sobre la base de que el gobierno, especialmente a través de las compañías nacionales de petróleo, provee empleos, otros beneficios y, en muchos casos, combustible subsidiado. En mi país ocurrieron hechos trágicos en 2022, cuando el gobierno intentó eliminar los subsidios. La gente salió a las calles; estuvimos al borde del colapso y, lamentablemente, cientos de personas murieron en medio de la violencia. Podemos ver lo frágil que es un contrato social cuando descansa en la idea de que el gobierno provee ciertos bienes públicos, y lo mal que funciona cuando esos bienes se retiran de un día para otro. Ambas dimensiones del contrato social deben estudiarse.

Cada país ofrece un conjunto único de mecanismos para hacer cumplir los contratos sociales, y espero que este proyecto produzca algunas recomendaciones de política pública interesantes.

3.8 Reflexiones de cierre: responsabilidades comunes pero diferenciadas y la necesidad de planificación

Daniel Chavez

Gracias a todos por acompañarnos en el lanzamiento de este proyecto. Me alegró mucho que varios panelistas hablaran de “nuestro proyecto”. Las *Advanced Grants* del ERC son, por definición, individuales y no se basan en consorcios. Constantemente me tienta referirme a S-OIL como “mi proyecto”, así que fue significativo escuchar que aquí se planteara esta iniciativa como un reto colectivo.

Quiero destacar tres ideas que surgieron de los intercambios de hoy. La primera surgió del comentario de Aitor Jiménez sobre los supuestos crímenes ambientales de Petrobras y otras compañías petroleras. Debemos ser claros: ninguno de los que trabajamos en este proyecto idealiza a las compañías petroleras. Somos conscientes de los desastres ambientales que muchas, y quizás la mayoría, de estas empresas han provocado. Al mismo tiempo, no podemos ignorar el papel fundamental que desempeñan y la responsabilidad que tienen en el desarrollo de los países del Sur Global. Por eso, las referencias a la propiedad pública realizadas hoy son tan importantes y constituyen el eje central de *la vía pública* que impulsa TUED.

La segunda idea, surgida de la intervención de Sean, es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en la descarbonización. En el marco teórico del proyecto, esta idea se alinea con el concepto marxista de desarrollo desigual y combinado. No podemos tratar a las petroleras del Golfo Pérsico o Noruega de la misma manera que a las empresas estatales de Brasil, Colombia, Angola, Nigeria o

Indonesia, por nombrar solo algunas. Las particularidades importan y deben ser teorizadas, no simplificadas.

La tercera idea se basa en el llamado de Tiziana a una transición *justa, soberana y popular*. Desde el proyecto, añadiríamos un adjetivo más: *planificada*. La situación actual en Cuba, donde el colapso del suministro de petróleo ha llevado a la sociedad al borde del colapso sistémico, lo deja claro. Tengo muchos puntos de acuerdo y varios de desacuerdo con colegas que trabajan en torno a la noción de *decrecimiento*, y lo que está sucediendo en Cuba nos obliga a todos a cuestionar algunas de las ideas fundamentales de esa literatura.

Las demandas para detener la extracción de combustibles fósiles pasan por alto una asimetría fundamental. Mientras proliferan los llamamientos a “dejarlo bajo tierra”, la inversión en energías renovables no se ha materializado a la escala que la mayoría de los países del Sur Global requiere. A muchas naciones africanas, latinoamericanas y asiáticas se les está pidiendo, en esencia, que abandonen su principal fuente de riqueza sin una alternativa viable: sin el capital, la tecnología ni las alianzas necesarias para la transición a una economía post-carbono.

El requisito previo es evidente. El Sur Global necesita acceso real a infraestructuras alternativas de energía y la financiación para construirlas. Las transferencias de capital, los acuerdos tecnológicos y los mecanismos financieros internacionales que puedan respaldar el despliegue rápido de energías renovables deben ser prioritarios. De lo contrario, la idea de “dejarlo

bajo tierra" presupone una lógica que no se da en muchos países.

Sin este cambio en los flujos de recursos y tecnología, las exigencias de detener la prospección, la exploración o la extracción resultan mero teatro político. Son convenientes para los países ricos y a ellos no les cuesta nada, ya que exigen sacrificios

a las sociedades cuyo desarrollo depende de la extracción de materias primas. La desigualdad estructural no puede desaparecer con eslóganes. Necesitamos investigaciones sólidas que sirvan de base para alternativas *deseables, factibles y alcanzables*. Seguiremos trabajando en estas cuestiones durante los próximos cinco años.



Un militante de la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de los trabajadores petroleros de Colombia, en la manifestación del 1 de mayo de 2026 en Barrancabermeja, conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores. Foto: Daniel Chavez.

“

Sean Sweeney: El mundo capitalista no es capaz de imaginar una bonanza lucrativa en la descarbonización sin subsidios masivos ni sin que los gobiernos asuman los riesgos, y solo un pequeño puñado de estados ricos puede sostenerlos de manera consistente.



Participantes

Daniel Chavez - Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) / Transnational Institute (TNI)

Daniel Chavez es profesor de investigación Ikerbasque en el grupo de investigación Ekopol de la Universidad del País Vasco y miembro asociado del Transnational Institute de Ámsterdam. Es el investigador principal del proyecto S-OIL. Su trayectoria de investigación está centrada en la economía política de las empresas estatales, la economía pública, la política industrial y la transición justa en América Latina, el sur de África y el sudeste asiático..

Donna Andrews - University of Cape Town

Donna Andrews es investigadora senior del Laboratorio de Ética (Ethics Lab) del Departamento de Medicina de la Universidad de Ciudad del Cabo (UCT). Su trabajo de investigación se centra en las dimensiones éticas del desarrollo, la política industrial, las respuestas al cambio climático, la economía política de la alimentación y la justicia socioecológica en África y el Sur Global.

Judith Clifton - Universidad de Cantabria

Judith Clifton es catedrática de Economía en la Universidad de Cantabria. Sus prioridades de investigación están focalizadas en las empresas estatales, la regulación, la internacionalización de los servicios públicos y la política industrial. Coordina el consorcio GreenPaths del programa Horizon Europe de la Comisión Europea.

José Sergio Gabrielli de Azevedo - Universidade Federal de Bahia

José Sergio Gabrielli de Azevedo es un economista brasileño y profesor emérito de la Universidad Federal de Bahía. Fue director financiero y, posteriormente, director ejecutivo de Petrobras entre 2003 y 2012, periodo durante el cual los descubrimientos del presal redefinieron la posición estratégica de la compañía. Ha publicado extensamente sobre política industrial, desarrollo soberano y el papel de las compañías petroleras nacionales.

Amir Lebdioui - University of Oxford

Amir Lebdioui es el director fundador del Centro TIDE (Technology and Industrialisation for Development) de la Universidad de Oxford. Su trabajo se centra en la política industrial verde en economías dependientes de la exportación de materias primas, con amplia experiencia de investigación en América Latina, África y el Sudeste Asiático.

Yacob Mulugetta - University College London

Yacob Mulugetta es catedrático de Política Energética y Desarrollo en el University College de Londres. Su investigación se centra en la economía política de los sistemas energéticos en África, la política de financiación climática y las condiciones bajo las cuales las transiciones energéticas pueden convertirse en auténticas impulsoras del desarrollo. Ha formado parte de paneles de expertos de la ONU y ha sido autor principal en publicaciones del IPCC y del Informe Mundial sobre Desarrollo Sostenible.

Ticiana de Oliveira Alvares - INEEP

Ticiana de Oliveira Alvares es la Directora Técnica del Instituto de Estudios Estratégicos sobre Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (INEEP). Vinculado a la Federación Unificada de Trabajadores del Petróleo de Brasil, el INEEP elabora análisis estratégicos del sector petrolero y gasífero brasileño desde las perspectivas laboral y de desarrollo. Su trabajo se centra en la política industrial, la transición energética y la economía política de la industria petrolera.

Serik Orazgaliyev - Nazarbayev University

Serik Orazgaliyev es profesor asociado en la Universidad Nazarbayev de Astaná, donde su investigación se centra en la economía política del petróleo y el gas en Asia Central, la gestión de las empresas estatales y la geopolítica de la energía en la región del Caspio.

Tatiana Roa Avendaño - Andean University Simón Bolívar

Tatiana Roa Avendaño es una ingeniera petrolera y defensora de la justicia energética en Colombia desde hace varias décadas. Se desempeñó como viceministra de Medio Ambiente durante el gobierno de Gustavo Petro.

Sean Sweeney - Trade Unions for Energy Democracy

Sean Sweeney es el coordinador global de Sindicatos por la Democracia Energética (TUED), una red que promueve el control público democrático de la energía. Con sede en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, ha dedicado dos décadas a desarrollar un análisis de la transición energética liderado por la clase trabajadora.

Mark Swilling - Stellenbosch University

Mark Swilling es profesor distinguido de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Stellenbosch y codirector del Centro para las Transiciones hacia la Sostenibilidad. Ha publicado extensamente sobre la economía política de la energía y la transición justa en el contexto africano, y ha desempeñado un papel activo en los debates políticos sobre la política energética del país y los planes de inversión para la transición.

Mabel Thwaites Rey - Universidad de Buenos Aires

Mabel Thwaites Rey es profesora de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, donde su trabajo se ha centrado en la teoría del Estado, la propiedad pública y la economía política latinoamericana. Sus investigaciones se basan en la tradición gramsciana y analizan en profundidad la configuración estatal y las políticas de privatización y de renacionalización en la región.

Miguel Virizuela - Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)

Miguel Virizuela es docente de economía en la Universidad del País Vasco e investigador asociado del proyecto S-OIL. Su trabajo de investigación se centra en la economía política de las compañías petroleras y en las condiciones institucionales y políticas para la transición energética en los estados dependientes del petróleo.



Oleoductos de Ecopetrol en torno al campo La Cira, cerca de la ciudad de Barrancabermeja, Colombia. Foto: Daniel Chavez.

En abril de 2026, los gobiernos de Colombia y los Países Bajos organizaron la primera conferencia multilateral dedicada a la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Representantes de 57 Estados, investigadores académicos, sindicalistas y participantes de la sociedad civil se reunieron en Santa Marta, marcando un punto de inflexión tras tres décadas de negociaciones estancadas en la ONU. En lugar de debatir si se deben abandonar los combustibles fósiles, la conferencia replanteó la cuestión en torno a mecanismos para lograr una transición justa, equitativa y con financiamiento apropiado para los países del Sur Global.





